

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:

5 de marzo de 2026

Contacto: press@democracyforward.org

**Amplia Coalición de Organizaciones de Servicios para Inmigrantes y Sindicatos
Presenta Demanda para Bloquear Políticas de la Administración Trump-Vance
que Atacan a Inmigrantes Según su País de Origen**

*La Impugnación Aborda Políticas Amplias del USCIS Que Detienen el Asilo, Congelan
Beneficios Migratorios y Dejan A Millones en un Limbo Legal*

Providence, R.I. — Una coalición de organizaciones de servicios para inmigrantes y sindicatos presentó hoy una [demanda](#) que impugna una serie de nuevas políticas discriminatorias de gran alcance implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que, en la práctica, han paralizado grandes partes del sistema de inmigración legal para muchas personas que ya viven en Estados Unidos. Las políticas incluyen una suspensión nacional de las adjudicaciones de asilo, un congelamiento indefinido de las solicitudes de beneficios migratorios para personas provenientes de países sujetos a la prohibición de viajes impuesta por la administración Trump-Vance, una revisión generalizada de los beneficios migratorios previamente aprobados y nuevas directrices que instruyen a los funcionarios de inmigración a considerar el país de origen de una persona como un factor negativo al decidir sobre beneficios discrecionales de inmigración.

Estas políticas son las más recientes en una serie de acciones ejecutivas ilegales dirigidas a atacar a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Estados Unidos que buscan acceder a o mantener beneficios migratorios disponibles bajo la ley estadounidense.

La demanda, presentada ante el Tribunal para el Distrito de Rhode Island, fue interpuesta por Dorcas International Institute of Rhode Island, Refugee Dream Center, Service Employees International Union (SEIU), International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW), African Communities Together (ACT), Venezuelan Association of Massachusetts (VAM), Partnership for the Advancement of New Americans (PANA) y American Gateways. Las organizaciones están representadas por Democracy Forward, Lawyers' Committee for Rhode Island, Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), Muslim Advocates, y South Asian American Justice Collaborative (SAAJCO).

En la demanda, los demandantes destacan cómo estas cuatro políticas han dejado a millones de personas en un limbo legal: impidiendo que solicitantes de asilo obtengan protección, bloqueando a inmigrantes la renovación de permisos de trabajo o la solicitud de tarjetas de residencia permanente, poniendo en riesgo la revocación de estatus legales previamente otorgados y exponiendo a los solicitantes a la negación de beneficios migratorios basada en su país de origen.

La demanda alega que las acciones de USCIS violan la Ley de Procedimiento Administrativo , la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Constitución. Entre otras cosas, las políticas incluyen:

- **La “Suspensión Global del Asilo” (*Global Asylum Hold*):** Suspende indefinidamente todas las adjudicaciones afirmativas de asilo, impidiendo que personas que huyen de la persecución obtengan protección.
- **La “Suspensión de Beneficios” (*Benefits Hold*):** Congela las solicitudes de beneficios migratorios, incluidos permisos de trabajo y tarjetas de residencia permanente, para personas provenientes de decenas de países afectados por la prohibición de viajes de la administración.
- **La “Revisión Integral” (*Comprehensive Re-Review*):** Exige al gobierno volver a revisar beneficios migratorios previamente aprobados, poniendo a personas que ya obtuvieron estatus legal en riesgo de perderlo.
- **La “Política de Factores Específicos por País” (*Country-Specific Factors Policy*):** Instruye a funcionarios de inmigración a tratar el país de origen de una persona como un factor negativo al decidir beneficios migratorios discrecionales.

“La xenofobia disfrazada de política sigue siendo xenofobia: está mal, es contraria a los valores estadounidenses y es ilegal”, dijo **Skye Perryman, Presidenta y Directora Ejecutiva de Democracy Forward**. “El Congreso creó un sistema de inmigración legal con reglas y protecciones claras. Estas políticas reemplazan ese sistema por directrices amplias, discriminatorias e ilegales que dejarán a las familias en el limbo, privarán a las personas de la capacidad de trabajar y mantener a sus familias y comunidades, y socavarán principios fundamentales de equidad y debido proceso. Nos honra representar a estas organizaciones para impugnar estas políticas ilegales y asegurar que el gobierno cumpla la ley.”

Los demandantes destacan que estas políticas ya están causando graves daños a comunidades inmigrantes en todo el país e interrumpiendo el trabajo de organizaciones sin fines de lucro y sindicatos que ayudan a inmigrantes a obtener estatus legal, autorización de trabajo y estabilidad.

Como explica la demanda, el Congreso encargó a USCIS adjudicar las solicitudes de beneficios migratorios conforme a estándares legales claros. Al suspender indefinidamente categorías completas de decisiones migratorias y atacar a solicitantes según su nacionalidad, las políticas impugnadas abandonan esos requisitos legales y los reemplazan con restricciones amplias que el Congreso nunca autorizó.

El caso es *Dorcas International Institute of Rhode Island et al v. U.S. Citizenship and Immigration Services et al*.

Lea la demanda [aquí](#).